



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 13 de Abril de 2023

Autos y Vistos; Considerando:

1º) Que a fs. 135/157 Transportadora de Gas del Norte S.A. promueve la acción prevista en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia de Salta, con el objeto de hacer cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse como consecuencia de la pretensión de la demandada de gravar con el impuesto de sellos el "Contrato de Operación y Mantenimiento de la Ampliación del Fideicomiso del Gas" celebrado el 22 de diciembre de 2004 entre el Poder Ejecutivo Nacional, representado en ese entonces por la Secretaría de Energía de la Nación (como organizador), TGN (como fiduciante) y Nación Fideicomisos S.A. (como comitente), con la participación del Ente Nacional Regulador del Gas (como autoridad de contralor).

Afirma que el Estado Nacional definió una política federal consistente en la realización de una obra de ampliación de gasoductos en todo el país a través de la implementación de los denominados "Fideicomisos de Gas", en los cuales se hallan involucrados el Estado Nacional, la actora y Nación Fideicomisos S.A., con la participación del Ente Nacional Regulador del Gas. Sostiene que el contrato que la Provincia de Salta pretende gravar con el impuesto de sellos fue celebrado en el marco de tales fideicomisos.

Efectúa una reseña del plexo normativo aplicable a la regulación del transporte y distribución de gas en todo el país

y, en ese contexto, señala que por medio del decreto 1882/04, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó un acuerdo entre el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Economía y Producción, la -en ese entonces- Secretaría de Energía, Nación Fideicomisos S.A. (fiduciario), el Banco de la Nación Argentina (cofiduciario), YPF S.A. (inversor del fideicomiso) y TGN (licenciataria), en el que se dejó plasmada la intención de YPF S.A. de invertir en el denominado "Fideicomiso de Gas Privado" cuya finalidad exclusiva era la de financiar la ampliación del Gasoducto Norte operado por la actora.

Agrega que, en el anexo I de ese decreto, se dispuso que -en una segunda etapa- se formaría un Fideicomiso de Gas Público cuya finalidad sería la de cancelar el financiamiento recibido por el Fideicomiso de Gas Privado, y que se obligaba a la parte actora a asumir la prestación del servicio de operación y mantenimiento de las ampliaciones que estaban comprendidas y que ello desembocó en la suscripción del contrato en cuestión.

Indica que, a través de la ley 26.095 -reglamentada por el decreto 1216/06-, se ratificó dicha política de interés nacional, al crearse cargos específicos para el desarrollo de las obras de infraestructura de los servicios de gas como aportes a los fondos de los fideicomisos constituidos o a constituirse, los cuales no podrían computarse como base imponible de ningún tributo nacional, con excepción del impuesto al valor agregado (arts. 2° y 3° de la mencionada ley).



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Considera que su actividad se encuentra regulada, controlada y amparada por normas y actos de carácter federal y que, por sus características, trasciende las fronteras de la Provincia de Salta e involucra un interés público general superior al de esa jurisdicción local.

Manifiesta que, en ese contexto, el fisco de la jurisdicción accionada inició un procedimiento de determinación de oficio del impuesto de sellos en relación con el contrato, a partir del cual se le reclama el pago de \$ 4.134.106,82 más intereses calculados al 31 de marzo de 2016 y multa por defraudación fiscal (decreto 655/17).

Solicita en los términos del art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el dictado de una medida cautelar, a fin de que la demandada se abstenga de reclamar administrativa o judicialmente el pago del impuesto de sellos cuestionado, los intereses y la multa, como así también de trabar cualquier medida cautelar sobre el patrimonio de la sociedad o sus directores.

2º) Que, posteriormente, a fs. 164/166 la parte actora informa que el 21 de enero de 2020 la Provincia de Salta la intimó a pagar los conceptos que son objeto de controversia en estas actuaciones. Agrega que se han emitido títulos ejecutivos, y que el reclamo se encuentra en situación prejudicial, con lo cual sostiene que el inicio de un juicio resulta inminente.

Aduce también que el día siguiente a dicha intimación presentó una nota ante la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta rechazándola y poniendo en conocimiento el inicio de la presente causa. Agrega que, si bien al momento de esa presentación (10 de febrero de 2020, fs. 166) no se habían recibido nuevas notificaciones, resulta factible el inicio de acciones de cobro, en las que se suelen decretar medidas cautelares. Por ello, insiste con la pretensión cautelar solicitada en la demanda inicial.

3°) Que de conformidad con lo resuelto por esta Corte en la causa CSJ 240/2011 (47-N)/CS1 "Nación Fideicomisos S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 21 de agosto de 2013, y lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal a fs. 159/161, este juicio corresponde a la competencia originaria del Tribunal.

4°) Que esta Corte ha establecido que si bien por vía de principio medidas cautelares como las requeridas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases *prima facie* verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 314:695).

5°) Que, asimismo, este Tribunal ha dicho en Fallos: 306:2060 "que como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de



Corte Suprema de Justicia de la Nación

su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad".

6°) Que en el presente caso el Tribunal considera que se configuran los presupuestos necesarios para acceder a la solicitud de la actora y, en el limitado marco de conocimiento propio del instituto en examen, no puede dejar de ponderar que la situación resulta sustancialmente análoga a la resuelta por esta Corte en Fallos: 333:538; 334:1626 y causa CSJ 97/2003 (39-T)/CS1 "Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad", sentencia del 29 de noviembre de 2011, circunstancia que torna procedente apartarse del criterio restrictivo con que deben considerarse este tipo de medidas cautelares frente al ejercicio de la actividad fiscal provincial (conf. causas CSJ 240/2011 (47-N)/CS1 "Nación Fideicomisos S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", citada precedentemente, y CSJ 1641/2013 (49-C)/CS1) "Construtora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Argentina c/ Chubut, Provincia del y otros s/ acción declarativa", sentencia del 15 de octubre de 2015).

7°) Que el peligro en la demora se advierte en forma objetiva si se consideran los efectos que provocaría la aplicación de la resolución determinativa impugnada, y la gravitación económica que tendría, aspectos que esta Corte no ha

dejado de lado al admitir medidas de naturaleza semejante (Fallos: 332:800 y sus citas, y causa CSJ 1641/2013 (49-C)/CS1, antes citada).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: I. Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte. II. Correr traslado de la demanda a la Provincia de Salta por el plazo de sesenta (60) días (artículos 319, 322 y 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). A los fines de su comunicación al señor Gobernador y al señor Fiscal de Estado en los términos del artículo 341 del código adjetivo, líbrese oficio al señor juez federal en turno de la ciudad de Salta. III. Decretar la prohibición de innovar a cuyo efecto corresponde hacer saber a la Provincia de Salta que deberá abstenerse por sí o por medio de sus organismos recaudatorios de reclamar a Transportadora de Gas del Norte S.A. el pago del impuesto de sellos pretendido sobre el "Contrato de Operación y Mantenimiento de la Ampliación del Fideicomiso del Gas", celebrado el 22 de diciembre de 2004, así como de los intereses y de la multa, y de trabar cualquier medida cautelar administrativa o judicial sobre su patrimonio o el de sus directores, hasta tanto se dicte en estas actuaciones sentencia definitiva. Notifíquese a la actora, mediante oficio en la persona del gobernador provincial y comuníquese a la Procuración General de la Nación.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Parte actora: **Transportadora de Gas del Norte S.A.**, representada por su
letrado apoderado, Álvaro C. Luna Requena.

Parte demandada: **Provincia de Salta, no presentada en autos.**